



**Eje IV:** "Hacia una comunidad organizada y un Estado transformador". Nueva estatalidad, democracia y movimientos populares

**Mesa 14:** Democracia y organizaciones populares

Título de la ponencia: **Una Democracia de urnas y escudos: Organización Política en Bolivia tras el Golpe de Estado**

Autor: **Tupaj García.**

### **Introducción**

Este trabajo tiene por objetivo reflexionar en torno a los cambios en las formas de organización política al interior de grupos de jóvenes que, hasta inicios de este año, se enfrentaban en las calles en el marco de la batalla política entre el *Proceso de Cambio* y el *Movimiento Restaurador Republicano*. Por lo mismo, haremos como primera parada una breve revisión histórica al primer periodo del gobierno del MAS-IPSP (2006-2019) con el objetivo de comprender en qué medida este periodo de transformación económica y social dio paso al surgimiento del *Movimiento Restaurador Republicano*, así como a la irradiación del *Proceso de Cambio* en sectores urbanos. El análisis de estos detalles, escasamente estudiados, pero de alto rigor político, nos permitirá comprender el Golpe de Estado, así como la resistencia popular al mismo, desde una óptica más profunda que aquella establecida por los medios de comunicación. Por lo tanto, este análisis será nuestra segunda parada. Recordar y enfocar el Golpe de Estado desde este enfoque permitirá explicar por qué, pese al retorno a la Democracia en 2020, en el país se ha ido normalizando el enfrentamiento entre grupos civiles, los cuales hasta enero de 2023 han cobrado la vida de 3 personas, la quema de sedes sindicales y un número indeterminado de heridos. Esta será la parada final del trabajo, así como aquella en la que trabajaremos con mayor detalle. Finalmente, las reflexiones elaboradas en nuestra última parada se trabajarán en el acápite de reflexiones.

**Un país en transformación: 2006-2018**

La crisis política, económica y social que atravesó Bolivia entre el año 2000 y 2003 representó un punto de inflexión en la lucha por el sentido común que se libraba entre el movimiento indígena sindical y la elite nacional. Esta crisis se caracterizó por lo que Álvaro García Linera llamó la crisis estatal de “corta y larga duración”, haciendo referencia tanto a la crisis del modelo económico neoliberal (corta duración) como al de la estructura y orden colonial (larga duración). A su vez, en el ámbito de esta crisis se insurrecciona un movimiento indígena que de manera subterránea transitaba un largo periodo de luchas contra las reformas neoliberales y el carácter colonial de la sociedad boliviana. Desde 1971, durante las dictaduras militares, comienza a gestarse un movimiento de reivindicación étnica y de clase, el cual politizará la identidad indígena para desenmascarar una realidad de explotación, servidumbre y humillación a la que estaba sometida la mayoría de la población nacional debido a la sedimentación del antiguo orden colonial. Por otra parte, las reivindicaciones campesino-sindicales de los 80’s y 90’s en contra de las políticas neoliberales de saqueo de recursos naturales y de persecución, tortura y asesinato contra quienes se resistan, devino en un cuestionamiento al horizonte económico que impuso la elite nacional a plan de militarizaciones, tras el retorno a la democracia. Finalmente, las insurrecciones urbanas del 2000 y 2003 a partir de las formas de organización territorial, lo que García Linera llamó la “Forma Multitud”, sintetizaron el clímax de una ruptura ante el modelo político y social vigente, rompiendo así los paradigmas sociales establecidos. Sera la fusión de estas tres luchas, la indígena comunal, la campesina sindical y la urbana-territorial en las barricadas de la “Guerra del Gas” (2003), la que dará nacimiento al *Proceso de Cambio*.

Por esta razón, el *Proceso de Cambio* se constituye como un horizonte de país que propone la transformación tanto del modelo económico como del antiguo orden colonial. Este horizonte se materializa en la *Agenda de Octubre*, que constituye un conjunto de medidas estatales a realizar y de la cual resaltamos los tres primeros puntos: Nacionalización de los Hidrocarburos, Asamblea Constituyente e Industrialización de los Recursos Naturales. Si bien esta agenda se crea tras la crisis de octubre de 2003, será recién en el año 2006, tras la posesión del primer presidente indígena de la historia de Bolivia, que la misma comenzará a cumplirse. Esta revisión es central para comprender dos detalles que a simple vista suelen confundirse. El primero es que el *Proceso de Cambio* es previo a la victoria electoral de Evo Morales, pues durante su gestación el *Proceso de Cambio* atravesó por diferentes periodos y se presentaron diferentes alternativas de transformar la sociedad (como la experiencia armada del EGTK en los 90’s o el intento de insurrección de los 2000’s). En este sentido, podemos entender la victoria del MAS-IPSP en las elecciones de 2005 como

la forma en la que, finalmente, el *Proceso de Cambio* pudo llegar al poder. Así, señalamos que el MAS-IPSP resulta ser el instrumento electoral de una fuerza política anidada en las estructuras sindicales, comunales y barriales, que propone la construcción de una Bolivia a la cabeza de las Naciones Indígenas, principalmente la Aymara, Quechua y Guaraní. El segundo es precisar que el nacimiento del *Proceso de Cambio* es inseparable del liderazgo político de Evo Morales dentro del movimiento indígena sindical. La conquista del poder en la forma específica que se dio está ligada en el ámbito electoral al MAS-IPSP en la medida que Evo Morales sintetiza en su liderazgo político esa acumulación histórica en el seno de las organizaciones indígena-sindicales.

La implementación de la *Agenda de Octubre* desde 2006, mediante la nacionalización de los hidrocarburos y el llamado a la Asamblea Constituyente, fue combatida por la elite nacional en todos sus niveles, escalando el conflicto hasta el intento de separatismo en 2008-2009, el cual cobro la vida de 32 personas y a día de hoy no se ha reconstruido un número total de heridos. Sabemos que esta historia acaba con la victoria del *Proceso de Cambio* y la refundación de Bolivia como Estado Plurinacional tras un largo periodo de conflicto y disputa en torno al texto constitucional. Sin embargo, de este periodo debemos recordar dos cosas. La primera es que las estructuras civiles armadas que apoyaron al separatismo no fueron totalmente desarmadas, sino que fueron desarticuladas mediante la aprensión de sus principales referentes políticos y la fuga de otros a Brasil y Estados Unidos. Lejos de observar esto como una “tibieza” por parte del gobierno, debemos recordar que en aquel entonces la derecha controlaba la Cámara de Senadores y el Poder Judicial y, por tanto, disputó políticamente para llegar a acuerdos tanto en el nuevo texto constitucional como en el resto de la arena política haciendo uso de tener la llave para la aprobación de la nueva constitución. Ante la asonada de una Guerra Civil que buscaba la balcanización del país, la victoria del MAS de manera democrática estuvo acompañada de victorias decisivas en la calle y de acuerdos políticos para desactivar a una derecha al borde de la inmolación. La segunda es que la victoria sobre la derecha devino en la construcción de una hegemonía discursiva, simbólica y política por parte del MAS-IPSP. El discurso separatista fue rápidamente desacreditado y la derecha atravesó un lento proceso de reorganización en el cual debían cambiar su discurso de cara a la sociedad.

El periodo posterior a la refundación de Bolivia se caracteriza por el desarrollo de las transformaciones económicas realizadas entre 2006-2009. La redistribución de la riqueza, la reducción de la pobreza y la desigualdad, la mejora de las condiciones de vida y la dignificación de la identidad indígena transformaron la estructura social de Bolivia. En este sentido, el ingreso de un 20% de la población nacional a la categoría de *ingresos medios*,

acompañado de la valoración de los vínculos sindicales e indígenas para acceder al Estado, trajo consigo cambios que nunca se observaron en la historia nacional. Por primera vez, para ingresar al Estado era más importante provenir de organizaciones sindicales o comunidades indígenas, que el haber estudiado en las mejores universidades privadas. Este cambio en los capitales culturales, sociales y étnicos legítimos para acceder al poder representaron una valorización de la identidad indígena, así como una desvalorización del capital étnico-blancocida. Por lo tanto, mientras los sectores históricamente desfavorecidos abrazaban un periodo de alegría y esperanza, la Clase Media Tradicional (CMT) veía con espanto la devaluación de sus capitales sociales, culturales y étnicos. Para esta CMT, que se había nutrido del Estado durante el periodo dictatorial y neoliberal siendo parte de su burocracia en mandos medios e inferiores, su bonanza económica durante el MAS no era suficiente si es que tenían que observar como “los igualados” o los “nuevos ricos” podían sentarse en su misma mesa. Para esta fracción de clase las transformaciones del MAS-IPSP representaban la pérdida de sus privilegios en todos los niveles sociales y políticos a manos de sus empleadas y jardineros que ahora tenían mejores oportunidades de ingresar al Estado. Es debido a esta devaluación de sus capitales que la CMT atravesó un periodo de politización y radicalización entre 2016 y 2019, constituyéndose en el brazo civil que impulsaría el Golpe de Estado y cuyos elementos más radicales alimentaron las estructuras paramilitares desplegadas durante el mismo. Esta politización estuvo acompañada de la recuperación del discurso de la “Democracia”, algo abandonado desde el separatismo. A su vez, se revitalizó el discurso colonial, desde el cual se canalizaba esta frustración ante la igualdad a partir de un discurso que proponía restaurar el antiguo orden social, proponiendo que Bolivia vuelva a ser una “Republica”. Esta será la génesis de lo que denominamos como el *Movimiento Restaurador Republicano*, cuyo objetivo fue intentar restaurar el orden social previo a 2006.

### **El Golpe de Estado y la Resistencia: 2019**

A partir del acápite anterior podemos romper con el absurdo debate de explicar el Golpe de Estado como producto de la repostulación de Morales o del supuesto “fraude electoral”. Ambas visiones, escuetas y sesgadas, son incapaces de comprender que la crisis socio-política de 2019 constituye en un nuevo clímax de una batalla más antigua en torno a cómo se debe organizar la sociedad, la economía y el Estado. Entrando a esta radiografía del enfrentamiento entre el *Proceso de Cambio* y el *Movimiento Restaurador Republicano* podemos observar la recuperación por parte de la derecha de formas de organización,

prácticas políticas y uso de la violencia que se remontan a la crisis de 2007-2009. En cuanto a formas de organización encontramos que en ambos periodos la derecha se articuló a partir de instituciones estatales bajo su control (alcaldías y gobernaciones) y estructuras cívicas o gremiales (Colegios de profesionales y Comités Cívicos). A estas formas previas de organización se sumaron las *Plataformas Ciudadanas*, las cuales consistían en grupos de jóvenes que realizaban activismo digital y desde ahí convocaban a movilizaciones. Todas estas formas de organización tenían su anclaje en la CMT; los Comités Cívicos a partir de su tradición como representantes de dicha fracción; los Colegios de profesionales (Médicos, Abogados e Ingenieros principalmente) en tanto que están conformados por miembros y referentes de la CMT desde sus entornos laborales; y las Plataformas Ciudadanas mediante su influencia y articulación con jóvenes de las universidades privadas más prestigiosas. Por otra parte, se recuperó la práctica política de llamar a Cabildos, donde los principales referentes de la derecha desplegaban un discurso que combinaba la simbología política con la católica. Se cambiaron las consignas, ya no se hablaba de regionalismo, sino de “liberar a Bolivia”. Se cambiaron las banderas regionales por la bandera Tricolor para contraponerla a la Wiphala, la cual ahora era reconocida como símbolo patrio. También hubo innovación en las formas de protesta, como lo fueron los Paros Cívicos en las principales ciudades, los cuales se caracterizaron por ser una forma eficiente de fortalecer las protestas en los territorios afines a la derecha nacional y el cual demandaba poco desgaste de sus recursos humanos. Finalmente, la quema de casas y sedes sindicales, la creación de grupos de choque con líneas de escudos y el ataque a símbolos asociados a la identidad indígena, fueron parte de un arsenal de prácticas retomados durante la crisis de 2019<sup>1</sup>. Al ejercicio de la violencia debemos resaltar una característica del 2019, que es el surgimiento y despliegue de estructuras paramilitares a nivel nacional. Como hemos dicho, las estructuras paramilitares de la época del separatismo quedaron inactivas y, por tanto, no es de extrañar que volvieran a activarse durante este periodo de crisis. Sin embargo, lo llamativo es que surgen nuevas estructuras, como la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), que llegó a ser la más grande de los nuevos grupos paramilitares, congregando cerca de 1000 efectivos. Estas estructuras paramilitares se volverán en el brazo cívico-militar que participará antes, durante y después del Golpe como fuerza de combate contra las estructuras sindicales y barriales del *Proceso de Cambio*. He aquí una característica a no olvidar para comprender el tiempo actual.

La crisis socio-política desatada por la derecha a partir de su reorganización y radicalización se encontró con un MAS-IPSP bastante acostumbrado a tiempos de paz y

---

<sup>1</sup> Para complementar esta comparación hemos realizado una tabla que se encuentra en Anexos.

con dirigencias políticas y sindicales que ya no eran producto de las décadas de lucha de los 90's o los 2000's. Esto llevo a que la resistencia al Golpe de Estado se apoye en las bases sindicales, mal paradas por la improvisación que demandaba la coyuntura, y a grupos urbanos auto-organizados que trataban de hacer frente las estructuras paramilitares y los grupos de choque en las principales ciudades del país. Esta desconexión entre el líder político y las bases movilizadas, producto de dirigencias intermedias mediocres y pusilánimes, explica por qué mientras los Secretarios Ejecutivos de la COB<sup>2</sup> y la CSUTCB<sup>3</sup> pedían la renuncia de Morales, centenares de mineros llegaban a la ciudad de La Paz para combatir a los paramilitares y decenas de miles de campesinos se congregaban a las afueras de la ciudad de El Alto para tomar la ciudad y enfrentarse a la policía. Así, a ojos de la derecha, la “victoria” de la renuncia de Evo y la celebración a nivel nacional con la quema de Wiphalas en las plazas de armas, fue ahogada por el grito abrumador de miles de personas que horas más tardes salían a combatir a la policía y las estructuras paramilitares. Un día después del Golpe de Estado, la policía había perdido el control de la segunda ciudad más grande del país, todas las carreteras estaban bloqueadas y los grupos paramilitares, en coordinación con la policía, combatían en seis zonas de la sede de gobierno de manera simultánea contra vecinos armados con palos y piedras. Para contener esta insurrección fue decisivo el accionar de las fuerzas armadas, las cuales combatieron a las fuerzas populares en cinco departamentos<sup>4</sup> del país, de las cuales destacan las masacres de Sensata y Sacaba, en los departamentos de La Paz y Cochabamba respectivamente. Tras el “proceso de pacificación” emprendido por el gobierno de facto y políticamente utilizado para recuperar una memoria larga de “pacificaciones” contra los indios, las estructuras sindicales, comunales y barriales emprendieron un lento proceso de reorganización. Este proceso se enmarcó en una reorganización política que debía responder al escenario electoral, pero, en simultáneo, dar solución ante el despliegue constante de los grupos paramilitares en las calles. En medio de esta reorganización cae la pandemia y una cuarentena que se tradujo en la militarización de los barrios populares, con el objetivo de evitar futuras protestas.

Sin embargo, para agosto de 2020 la situación económica, social y sanitaria llegó a un punto de inflexión que, acompañados de una postergación indefinida de las elecciones, devinieron en las “Jornadas de Agosto”. Este nombre hace referencia a una sublevación

---

<sup>2</sup> La Central Obrera Boliviana es la estructura sindical histórica de los sindicatos a obreros y mineros.

<sup>3</sup> La CSTUCB es la principal estructura sindical del campesinado Bolivia y es precursora del *Proceso de Cambio*.

<sup>4</sup> Los departamentos son equivalentes a las gobernaciones en Argentina. Bolivia cuenta con 9 departamentos.

masiva de las fuerzas que componen el *Proceso de Cambio*, la cual se tradujo en el bloqueo de carreteras más grande de la historia nacional acompañada con movilizaciones masivas en los centros urbanos. A su vez, frente a la inminente represión de los grupos paramilitares y la policía, surgieron grupos de combatientes que, asemejándose a la Primera línea de Chile o Colombia, se atrincheraron en los barrios populares que se encontraban en protesta y los cuales se nombraron a sí mismos como “Auto-convocados”. Durante estas jornadas los grupos paramilitares intentaron derrotar los Auto-convocados en 3 ocasiones y trataron de romper los puntos de bloqueo rurales en otras 4, resultando todos en derrotas significativas para el gobierno de facto. Durante esta movilización los sindicatos campesinos desempolvaban los fusiles de luchas anteriores y llamaban a la renuncia de la presidenta y el retorno del *Proceso de Cambio* al poder. Frente a este clímax insurreccional, la derecha decide aceptar la realización de los comicios y el MAS-IPSP vuelve a ser el catalizador democrático que encause la fuerza popular. La elección de octubre de 2020 y el retorno a la democracia pueden entenderse como la objetivación de una victoria simbólica, política y militar que se obtuvo durante las *Jornadas de Agosto* frente a una derecha que terminó abandonada por las Fuerzas Armadas. Esta forma de comprender el retorno democrático nos ayuda a verlo como otro punto de inflexión de un enfrentamiento de más larga data y no como producto de una campaña electoral.

### **Una Democracia de urnas y escudos: 2020-2023**

La posesión presidencial de Luis Arce en noviembre de 2020 se da en un contexto adverso en todos los sentidos. Desde una economía nacional destruida por la cuarentena, pasando por un Estado saqueado y una crisis sanitaria descontrolada, hasta una derecha que rezaba en las puertas de las unidades militares pidiendo que se “detenga al masismo”, la gestión de Arce tenía el deber de levantar la economía y hacer justicia con respecto a los responsables del Golpe de Estado. A esta dificultad tenemos que sumar las elecciones sub-nacionales de 2021, en las cuales los rangos medios del MAS-IPSP fueron incapaces de dar batalla discursiva y políticamente a la ultraderecha en espacios importantes. Así, varios candidatos del MAS-IPSP fueron incapaces de aglutinar a los sectores del Proceso de Cambio que meses antes apoyaron la elección nacional debido a un intento incomprensible de tratar de seducir a la “clase media tradicional” para “pelearle votos a la derecha”. Estas acciones, combinado a otros errores, permitieron que actores importantes del Golpe de Estado se incrustaran en las alcaldías de las principales ciudades del país, así como en la gobernación

de Santa Cruz. Sin embargo, pese a estos errores, el gobierno ha sido capaz de ir reactivando la economía y resolver la crisis sanitaria a partir de la vacunación universal.

Ahora bien, desde marzo de 2021, con la detención de Jeanine Añez, el gobierno de Arce despliega una política comunicacional que denunciaba las masacres y vulneraciones de derechos humanos por parte de la derecha, la policía y las fuerzas armadas, durante el Golpe de Estado. Esto ha devenido en la detención de referentes políticos, cabecillas de los grupos paramilitares, generales de las Fuerzas Armadas y altos mandos de la Policía Nacional. Acompañado de numerosos informes internacionales de derechos humanos, la batalla discursiva en torno a cómo interpretar la crisis de 2019 fue lentamente girando a favor del *Proceso de Cambio*. Sin embargo, esta batalla narrativa vino acompañada de acciones en calle que fueron decisivas. A diferencia de 2009, en donde la derecha se replegó de las calles, el periodo 2021-2023 ha estado marcado por movilizaciones constantes de la oposición. Estas movilizaciones han sido acompañadas de una recuperación del discurso regionalista de 2008, desde el cual la gobernación de Santa Cruz, a la cabeza de uno de los principales referentes políticos del Golpe de Estado, ha recuperado la simbología y terminología separatista. Sin embargo, la derecha radical ha sido capaz de irradiar estas reivindicaciones regionales a nivel nacional principalmente en dos momentos: frente al proyecto de ley de sanción *a las ganancias ilícitas y financiamiento al terrorismo*, en octubre de 2021, y la fecha del Censo Nacional de Población y Vivienda, en 2022. En ambas ocasiones, a las que podemos sumar las protestas en contra del juicio a Añez y otros participantes del Golpe, las movilizaciones y protestas de la derecha se han encontrado con grupos urbanos de Auto-convocados que han salido a dar batalla. Por lo tanto, el enfrentamiento entre los grupos de choque de la derecha (guiados por efectivos de los grupos paramilitares) y los grupos de Auto-convocados se ha vuelto una constante en las principales ciudades del país, en donde generalmente vencen los últimos. La única excepción a esta constante es la ciudad de Santa Cruz, donde los grupos paramilitares se despliegan abiertamente y atacan los barrios populares afines al MAS-IPSP, donde se enfrentan a organizaciones territoriales de Auto-convocados. Con el tiempo estos enfrentamientos constantes se han concentrado en las ciudades de La Paz y Santa Cruz. En ambos casos, los enfrentamientos se desarrollan sobre una disputa simbólica y territorial de la ciudad. Esto ha generado que ciertas organizaciones juveniles, tanto por izquierda como por derecha, atraviesen procesos de militarización de sus formas de protesta. Si comparamos los enfrentamientos entre civiles de 2019 y 2023, podemos observar el desarrollo y especialización de formas de combate, equipamientos y tácticas empleadas por los grupos enfrentados. Sin embargo, esto también viene acompañado de

una mejora en las formas de camuflaje y mimetización por parte de estos grupos durante las movilizaciones masivas. A día de hoy los jóvenes que conforman ambos grupos se enfrentan entre sí sin necesidad de sacar sus escudos o chalecos antibalas, sino que, vestidos como cualquier persona, integran las filas de sus respectivas movilizaciones hasta el momento de combatir, en donde se constituyen en los grupos de vanguardia.

Como podemos ver, este desarrollo de las formas de organización política de los grupos radicalizados viene acompañado de un proceso de aprobación de dicho uso de la violencia por parte de las personas que rodean a estos grupos. Así como las señoras indígenas de polleras apoyan a las y los jóvenes que conforman a los Auto-convocados, las mujeres de la CMT están de acuerdo con que sus “héroes de la democracia” defiendan sus movilizaciones frente a las “hordas salvajes masistas/indios”. Esta legitimación del uso de la violencia política como herramienta de defensa de las posiciones ideológicas ha transformado dinámicas al interior del propio Estado. Ahora, los debates encarnizados entre la derecha y el MAS-IPSP en la Asamblea Legislativa se resuelven mediante los resultados de los enfrentamientos en calle entre grupos de civiles. A su vez, la policía ha dejado de ser una fuerza que evite la violencia y ahora actúa solo para evitar la pérdida de vidas humanas por parte de un bando al otro. Aunque claro, las “demoras” de la institución en socorrer gente afín al MAS-IPSP son más comunes y ya han cobrado la vida de tres personas. La única excepción a este actuar de los aparatos represivos ha sido el despliegue masivo de los mismos en la ciudad de Santa Cruz en diciembre de 2022 y enero de 2023. Esto se da después de la quema de la Fiscalía Departamental, sedes sindicales y el intento de toma del Comando Departamental de la policía por parte de la derecha tras la detención de Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, debido a su participación en el Golpe de Estado.

### **A modo de reflexión**

Desde la detención de Camacho en diciembre de 2022 la situación política de Bolivia se ha estabilizado, lo cual ha dado paso a otro tipo de debates y conflictos. Sin embargo, la división social respecto a si Bolivia debe ser un Estado Plurinacional o una Republica sigue vigente. A su vez, las estructuras paramilitares no han sido desarticuladas y tampoco sería posible hacerlo. Como hemos visto, estas estructuras nacen, se apoyan y nutren de un grupo de la sociedad politizado y radicalizado, por lo que la disolución aparente de estos grupos solo impulsará a generar unos nuevos, con nombres diferentes pero tácticas similares. Por otra parte, la inactividad de los grupos de Auto-convocados no debe confundirse con su

desarticulación o dilución. En las bases del *Proceso de Cambio* existe una claridad respecto a que la próxima batalla con la derecha se avecina en las elecciones nacionales de 2025. En este sentido, observamos una derecha que está dispuesta a vulnerar el sistema democrático con tal de reestablecer sus privilegios, tanto de las elites como los de la CMT. Esto expresa una forma de entender la política donde la democracia electoral es solo una de las herramientas para reinstaurar los privilegios arrebatados y el orden social anterior. Así, el surgimiento y fortalecimiento de núcleos fascistas al interior de estos sectores sociales puede entenderse como una apuesta “alternativa” a la salida democrático-electoral, donde el uso de la violencia se constituye en la herramienta principal para el acceso al poder. La experiencia boliviana nos muestra que el crecimiento y proliferación de estas ideas y grupos fascistas se acelera cuando estos sectores sociales ven acotada o inviable su victoria en el ámbito electoral. Asimismo, el que la derecha pueda tener posibilidades electorales no inhibe ni desarticula esta tendencia, sino que la “congela” y las convierte en un “plan B”.

Ante esto, la experiencia de Bolivia viene demostrando que una forma de hacer frente al ascenso del fascismo radica en una organización social, sindical y militante híbrida, en la que se fortalezca tanto el carácter democrático como la organización política de calle. Sin embargo, el aporte fundamental de experiencia boliviana no solo está en su capacidad de organización de lucha en las calles, sino en combinar esa lucha con una disputa del sentido común en torno a cómo comprender la sociedad, los derechos, la igualdad, el Estado y la economía. Esta combinación entre disputa de ideas y disputa en las calles es algo presente en todos los procesos progresistas y revolucionarios del mundo, pero lo particular de Bolivia haber aplicado esto en un nuevo contexto para las izquierdas progresistas latinoamericanas que es la batalla contra el fascismo. Así como en los 2000’s fue la disputa en las calles la que logro revertir o evitar los Golpes e intentonas separatistas en Venezuela, Ecuador y Bolivia respectivamente, la experiencia analizada brinda aportes respecto a cómo encarar esta nueva faceta que están intentando tomar las viejas elites económicas y sus vasallos en su nuevo intento por restablecer sus privilegios.

Este texto, principalmente dedicado a jóvenes y en particular a quienes, como yo, nos encontramos en la primera línea de los enfrentamientos, tiene por objetivo brindar la siguiente reflexión. Estamos ante un tiempo donde nuestras certezas se desmoronan y la derecha intenta avanzar de forma más violenta y antidemocrática. Ante esto, toca convertirnos en combatientes de la esperanza que construyan un horizonte común donde todas y todos vivamos mejor, así como debemos prepararnos para una batalla que, como en Bolivia, demandara nuestra organización en todos los niveles y aspectos. Si combinamos ambas cosas, el nuevo amanecer será inevitable y hermoso.



I Congreso del Pensamiento Nacional Latinoamericano  
8, 9 y 10 de junio de 2023  
Universidad Nacional de Lanús (UNLa)  
Lanús, Provincia de Buenos Aires, Argentina

**Anexos**

Cuadro de Comparación Visual		
	Periodo	
Acción Política	2007-2009	2019
Cabildos Cívicos		
Quema y humillación de símbolos indígenas		
Grupos de Choque		

Estructuras  
Paramilitares



Fuente: elaboración propia en base a imágenes de internet.